Resolución de 15 de julio de 1992, de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato que se cita.	6.515	Almería. (PP. 1077/92).	6.516
AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS (CADIZ)		AYUNTAMIENTO DE CASTRO DEL RIO (CORDOBA)	
Anuncio (PP. 1008/92).	6.515	Anuncio (PP. 924/92).	6.516
AYUNTAMIENTO DE ALMERIA		AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO (ALMERIA)	
Anuncio de concurso para la concesión del servicio municipal de abastecimiento de agua y saneamiento de		Anuncio de convocatoria para la concesión de la instalación de Marquesinas-Bus publicitarias en el término municipal de El Ejido-Amería. (PP. 952/92).	6.517
5.2. Otros anuncios			
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA		de interés cultural, a favor de la Necrópolis Megalítica de La Angostura, El Moral y los Gigantes, en Ronda (Málaga).	6.519
Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla, de otorgamiento de los permisos de investigación Andrea, fracción I, núm. 7487 A, Andrea fracción II, núm. 7486 B, Natividad núm. 7453 y el Roble núm. 7501. (PP. 184/92).	6.518	AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARIA (CADIZ)	
Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla, de otorgamiento de los permisos de investigación Salinos, núm. 7500 y Cinchar II núm. 7512. (PP. 439/92).	6.518	Anuncio de información pública. (PP. 1075/92).	6.523
Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla, de otorgamiento de los permisos de exploración. Sol núm. 7509 y de los permisos de investigación El Hacho núm. 7482, primero ampliación a Salinas núm. 7502, y Cerramartillo núm. 7517. (PP. 516/92).	6.518	Anuncio de información pública. (PP. 1076/92).	6.523
Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla, sobre solicitud de permisos de investigación. El Castillo núm. 7563 y primera ampliación Lo Bodeguillo núm. 7565 (PP. 608/92).	6.518	COLEGIO DE LA PRESENTACION	
CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES		Anuncio de extravió de título de Graduado Escolar. (PP. 1521/90).	6.523
Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga, sobre actas previas a la ocupación de los terrenos afectados por las obras que se citan. (11-MA-161).	6.518	I.B. PABLO PICASSO	
CONSEJERIA DE CULTURA Y MEDIO AMBIENTE		Anuncio de extravió de título. (PP. 975/92).	6.523
Anuncio de la Dirección General de Bienes Culturales, por la que se somete a información pública el expediente de declaración de zona arqueológica como bien		COLEGIO EUROPA	
		Anuncio de extravió de título de Graduado Escolar. (PP. 931/92).	6.523
		MANCOMUNIDAD DEPORTIVA VEGATEM. COMISION GESTORA	
		Anuncio (PP. 920/92).	6.523
		SDAD. COOP. AND. ORIPPO.	
		Anuncio (PP. 981/92).	6.523

1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

DECRETO 133/1992, de 21 de julio, por el que se establece el Régimen Transitorio en la aplicación del Decreto 72/1992, de 5 de mayo, por el que se aprueban las normas técnicas para la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas y en el Transporte de Andalucía.

El Decreto 72/1992, de 5 de mayo, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, núm. 44, de 23 de mayo de 1992, establece las normas técnicas para la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas y en el transporte en Andalucía, que afectan a los proyectos y obras comprendidos en su ámbito de aplicación.

A raíz de la publicación del citado Decreto, se ha venido poniendo de manifiesto, tanto por parte de diversos organismos inversores de la Junta de Andalucía, como por la iniciativa privada y colectivos profesionales afectados, la necesidad de establecer un período de transitoriedad en la aplicación de dicho Decreto que contemple la realidad del proceso constructivo.

En efecto, la complejidad del procedimiento a seguir desde el encargo de los proyectos hasta su aprobación o visado, de una

parte, y el dilatado período de tiempo que puede transcurrir hasta el otorgamiento de la licencia de obras, de otra, aconsejan el establecimiento de un régimen transitorio en la aplicación del Decreto 72/1992, de 5 de mayo. Con ello se propiciará el cumplimiento de la programación de inversiones, tanto públicas como privadas evitando modificaciones de proyectos ya terminados o en fase muy avanzada de redacción o la entrada en vigor del Decreto y las repercusiones jurídicas, económicas y administrativas que de ello se deriven.

En definitiva, se trata de conjugar los objetivos pretendidos por la norma, con el principio de seguridad jurídica que debe impregnar toda disposición.

En su virtud, a propuesta de los titulares de las Consejerías de Asuntos Sociales y Obras Públicas y Transportes, previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 21 de julio de 1992.

DISPONGO

Artículo Único. Se añade al Decreto 72/1992, de 5 de mayo, por el que se aprueban las normas técnicas para la accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas y en el

transporte en Andalucía, la siguiente Disposición Transitoria:

«DISPOSICION TRANSITORIA

No será preceptiva la aplicación del presente Decreto:

a) A las obras en construcción y a los proyectos que tengan concedida licencia de obras, en la fecha de entrada en vigor del citado Decreto.

b) A los proyectos aprobados por las Administraciones Públicas o visados por Colegios Profesionales en la fecha de entrada en vigor del mencionado Decreto, así como a los que se presenten para su aprobación o visado en el plazo de tres meses a partir de dicha entrada en vigor.

c) A las obras que se realicen conforme a los proyectos citados en el apartado b), siempre que la licencia se solicite en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor del referido Decreto.

Todo ello, sin perjuicio de que los proyectos y obras a que se refieren los apartados anteriores puedan ser adaptados a las normas contenidas en el presente Decreto».

DISPOSICION FINAL

El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 21 de julio de 1992

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de la Presidencia

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

DECRETO 119/1992, de 7 de julio, por el que se regula el Régimen de Financiación de las actuaciones de los Sectores Público y Protegido en materia de Vivienda, establecidas en el Plan Andaluz de Vivienda 1992/1995.

La Constitución Española establece en su art. 47 como un principio rector de la política social y económica, el derecho al disfrute de una vivienda digna y adecuada. Asimismo, especifica que los poderes públicos son los responsables de promover las condiciones necesarias y de establecer las normas adecuadas para hacer efectivo este derecho.

Al tener la problemática de la vivienda una dimensión múltiple que afecta y viene condicionada por distintos factores, como son la definición de la política económica general, las regulaciones del préstamo, del mercado hipotecario o de la fiscalidad, la situación urbanística, del suelo y edificatoria, etc., su resolución no cabe circunscribirla a una Administración concreta, debiendo en consecuencia considerarse a las distintas administraciones, Central, Autónoma y Local, como corresponsables en la búsqueda y aplicación de los remedios que coadyuven en la resolución de la situación en que actualmente se encuentra el subsector vivienda.

En este sentido, las características que reviste dicha problemática en Andalucía, junto con la voluntad de abordar la situación en su conjunto, en el sentido de articular en un único programa las diversas funciones y actuaciones, así como de garantizar su máxima operatividad para hacer frente a las circunstancias actuales, aconsejaron la conveniencia de abordar la redacción de un Plan Andaluz de Vivienda que integrara todos los aspectos relativos a una política global de vivienda.

De esta manera se recoge en el Acuerdo del Pleno del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada los días 1 y 2 de octubre de 1991, por el cual la Administración Autónoma se comprometió a elaborar un Plan de vivienda para cuatro años que contuviera propuestas concretas con el objeto de reducir el déficit de viviendas sociales en el ámbito territorial de nuestra Comunidad Autónoma.

Paralelamente, y con similares pretensiones, el R.D. 1932/1991, de 20 de diciembre, sobre medidas de financiación de actuaciones protegibles en materia de vivienda del Plan 1992-1995, establece medidas para implantar un nuevo modelo de política de vivienda, en el que se integren las actuaciones de las distintas Administraciones.

En la línea de trabajo señalada, el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía en sesión celebrada el día 3 de marzo de 1992 aprobó el Plan Andaluz de Vivienda 1992-1995 como documento marco, donde se fijan los objetivos globales y se inscribe la totalidad de las actuaciones, tanto públicas como protegibles, influyendo incluso sobre la vivienda libre mediante la orientación de todo el subsector.

De esta manera, el Plan Andaluz de Vivienda no nace con un carácter exclusivo de texto complementario al R.D. 1932/1991, de 20 de diciembre, sino como el documento que contiene una estrategia determinada y unos objetivos explícitos, integrando las aportaciones del Estado junto a sus propias actuaciones, de acuerdo con los objetivos definidos, asumiendo la distribución territorial de todas las actuaciones, así como la integración de la Administración Local implicada, mediante los mecanismos que el mismo Plan diseña.

La puesta en marcha y ejecución del Plan Andaluz de Vivienda así como la armonización con el Plan Nacional regulado por el R.D. 1932/1991, de 20 de diciembre, sobre medidas de financiación de actuaciones protegibles en materia de vivienda, aconseja la regulación, mediante una única norma, de aspectos de necesaria modificación y otros conceptos de nueva creación.

El presente Decreto, en consecuencia, es una parte del conjunto más amplio de medidas acordadas por el Gobierno de la Comunidad Autónoma Andaluza en materia de política de vivienda con la pretensión de facilitar el acceso a una vivienda digna a las personas con escasos recursos y en especial a los jóvenes en busca de su primera vivienda en los centros urbanos; asegurar la coordinación entre política de vivienda y política de suelo, e incrementar la oferta de vivienda tanto pública como privada favoreciendo la articulación entre el mercado, la Administración Pública y los usuarios.

Para la elaboración de este Decreto, han sido tenidas en cuenta observaciones y sugerencias de la Asociación Andaluza de Promotores de Viviendas Sociales, Federación Andaluza de Empresarios de la Construcción, Federación Andaluza de Municipios y Provincias y diversas Entidades de crédito, públicas y privadas.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Obras Públicas y Transportes y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 7 de julio de 1992.

DISPONGO

TITULO PRELIMINAR

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- El régimen autonómico de financiación de las actuaciones de los sectores público y protegido en materia de vivienda establecidas en el Plan Andaluz de Vivienda 1992-1995 y la determinación de sus instrumentos de gestión se regirán por el presente Decreto.

Artículo 2.- El Sector Público, financiado prioritariamente con cargo a los presupuestos de la Junta de Andalucía, está constituido por los siguientes programas de viviendas de promoción pública autonómica: